

**RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –**



**FACULTAD DERECHO  
PROGRAMA DE PREGRADO  
BOGOTÁ D.C.**

**AÑO DE ELABORACIÓN:** 2016

**TÍTULO:** JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EN COLOMBIA: UN ESTUDIO COMPARADO CON LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

**AUTOR (ES):** CRUZ MICAN, Diana

**DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):** TIRADO, Misael

**MODALIDAD:** ARTICULO DE REFLEXIÓN

**PÁGINAS:**  **TABLAS:**  **CUADROS:**  **FIGURAS:**  **ANEXOS:**

**CONTENIDO:**

**INTRODUCCIÓN**

**1. JURISDICCIÓN EN COLOMBIA**

**2. DIFERENCIAS ENTRE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA**

**3. ORÍGENES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA**

**4. CASOS DE APLICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA**

4.1. Cosmovisión indígena y religiones monoteístas

4.2 Maleficios o prácticas mágica religiosas

4.3 Casos de partos múltiples

4.4 Ablación y/o clitoridectomía

**CONCLUSIONES A LA LUZ DE LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DOS JURISDICCIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA OCCIDENTALIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA**

**REFERENCIAS**

**PALABRAS CLAVES:** estudio comparado, jurisdicción especial indígena, jurisdicción ordinaria, pueblos indígenas.

**DESCRIPCIÓN:** Se realizó un estudio comparado de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia con la Jurisdicción Ordinaria en el marco de sus usos y costumbres. Esto es, desde el punto de vista de los valores, las tradiciones ancestrales, la convivencia en comunidad, la cosmovisión, el territorio, las prácticas mágicas religiosas y el concepto de colectividad, madre tierra, y reivindicación de la cultura. Así mismo, desde el punto de vista de sus autoridades tradicionales, sus consejeros, los remedios, las sanciones, las faltas y los demás componentes en la aplicación de su propia jurisdicción, haciendo un comparativo con la Jurisdicción Ordinaria. Para el efecto se indagó la información bibliográfica sobre Jurisdicción Especial Indígena, Jurisdicción Ordinaria y el punto de encuentro entre ambas.

**METODOLOGÍA:** Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la La jurisdicción especial indígena en Colombia, se realizó un estudio comparado con la jurisdicción ordinaria

**CONCLUSIONES A LA LUZ DE LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DOS JURISDICCIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA OCCIDENTALIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.** Como se observó a lo largo de este proyecto de investigación tanto la Jurisdicción Especial Indígena y como la Ordinaria operan con sistemas particulares para la aplicación de justicia; las dos jurisdicciones son igual de válidas, legítimas, cuentan con desarrollo normativo y jurisprudencial, así mismo, tienen alcances, límites, procedimientos, sanciones y ámbitos de aplicación particulares. Con este panorama de reflexión a continuación se resuelven los tres interrogantes planteados al inicio de este escrito ¿es importante que las dos jurisdicciones se coordinen? ¿De darse, implicaría que la jurisdicción especial indígena se occidentalice? Y ¿Qué factores deberían confluir para que los Derechos Humanos se garanticen plenamente por parte de las dos jurisdicciones?

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



Si bien la Jurisdicción Especial Indígena, como vimos a lo largo del presente estudio, tiene la misma jerarquía de la Jurisdicción Ordinaria, se ejerce en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución, no requiere de autorización alguna por parte de los organismos del Estado para actuar, tiene sistemas jurídicos contruidos a partir de las tradiciones ancestrales (usos y costumbres), tiene autoridades que imparten justicia, algunos de sus procedimientos y sanciones han estado en continua transformación ante la sociedad cambiante, las exigencias jurídicas contemporáneas y los asuntos nuevos sometidos a su conocimiento, requiere estar coordinada con la Jurisdicción Ordinaria, y viceversa.

El Estado colombiano está en deuda de avanzar en la constitución de una Ley de Coordinación que conduzca a la coordinación de las dos jurisdicciones y al cumplimiento de las obligaciones contraídas constitucionalmente, como lo ha venido exigiendo la Mesa Permanente de Concertación Indígena al Ministerio del Interior y Justicia y al Congreso de la República.

Si bien ya se han construido estrategias para coordinar acciones entre las dos jurisdicciones, estas son claramente insuficientes. Dos ejemplos de ello a continuación. El Consejo Superior de la Judicatura como órgano constitucional al servicio de la rama judicial, ha desarrollado procesos para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, desarrollando el programa denominado “Apoyo a la Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena” (Consejo Superior de la Judicatura y Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, 2003). A la vez se han elaborado rutas metodológicas que establecen las acciones a seguir cuando se haga necesario coordinar las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con las autoridades indígenas en ejercicio de su jurisdicción.

Del contexto expuesto a lo largo de este proyecto de investigación se deduce que la coordinación entre las dos jurisdicciones es importante, pues podría generar los efectos positivos que se detallan:

(a) Se acataría la jurisprudencia, el Convenio 169 de 1989 y el mandato constitucional. Por ejemplo, la ordenanza sobre la construcción de una ley que coordinara la jurisdicción especial indígena y con el sistema judicial nacional, así mismo, el artículo 246 constitucional, según el cual “las autoridades de los pueblos indígenas tienen la potestad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial correspondiente, en aplicación de sus normas y procedimientos

consuetudinarios, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y las leyes colombianas” (Castro Jorge, 2010, p. 117).

(b) Las decisiones de una u otra jurisdicción empezarían a tener en la práctica igual valor jurídico frente al Estado colombiano; es decir, las decisiones sancionatorias o procedimentales que acojan las autoridades indígenas para impartir justicia en un asunto de su competencia tendría igual validez y legitimidad que las decisiones tomadas por los jueces ordinarios en casos de indígenas donde tengan competencia para intervenir.

(c) Se propiciaría que se entendiera que el dilema para coordinar las dos jurisdicciones pasa por superar los discursos de autonomía vs justicia y hacer compatibles los fundamentos del Estado Social de Derecho, pluralismo-monismo, pues en la práctica lo que ocurre es una especie de ejercicio de negación al pluralismo por parte de juristas monistas.

(d) Se empezaría a entender por parte de los funcionarios judiciales occidentales cuáles son sus límites y casos en que pueden intervenir, a la vez, la autonomía y autodeterminación legítima que tienen los pueblos indígenas para administrar justicia, como lo ha reconocido la Corte Constitucional al referirse a este derecho como fundamental. Superándose así el amplio desconocimiento existente en el ámbito occidental sobre los procedimientos internos de las comunidades indígenas, que ha estado desencadenado que su derecho a la Jurisdicción Especial Indígena no se aplique adecuadamente por la intromisión de una jurisdicción en los asuntos de la otra.

(e) Las autoridades y funcionarios que actúen en el marco de la administración de justicia podrían ejercer sus funciones de forma más eficiente y efectiva.

(f) Se superarían y/o reduciría la frecuencia de conflictos entre las dos jurisdicciones.

(g) Se disminuiría el alto impacto en los sistemas propios por la imposición de leyes y por los conflictos con la Jurisdicción Ordinaria.

(h) La Jurisdicción Especial Indígena, con sus sistemas jurídicos, de derecho propio y sancionatorios, se fortalecería como respuesta a las comunidades indígenas que habitan y conciben el territorio de una manera diferente y tienen formas propias de administrar justicia y mantener el orden social a partir de sus

usos y costumbres<sup>13</sup>. Cada pueblo indígena fortalecería su propio sistema jurídico, a su vez, aumentaría el nivel de confianza sobre las decisiones de este.

(i) Las dos jurisdicciones podrían consolidarse como sistemas de aplicación de justicia enmarcados en el respeto y protección de los derechos humanos de unos y otros.

Profundicemos en cuatro de estos factores positivos:

### **Derechos humanos**

La coordinación de las dos jurisdicciones propiciaría la realización de diálogos permanentes, dirigidos a encontrar puntos de encuentro sobre mecanismos conjuntos que permitan la erradicación de la violación de los derechos humanos al momento de impartir justicia a indígenas por parte de autoridades indígenas y a indígenas por occidentales. Por ejemplo, realizando acuerdos para erradicar todo tipo de tratos inhumanos o degradantes en las sanciones o la pérdida de la cultura en los indígenas cuando están en una cárcel occidental.

La Corte Constitucional en la Sentencia T - 349 de 1996 reiteró la importancia de respetar la autonomía de las comunidades indígenas, pero también que esta jurisdicción garantice al involucrado o implicado el debido proceso, que comprende que pueda hacer uso de su derecho a la defensa. En la Sentencia T - 523 de 1997 consideró importante que se abstuviera de aplicar sanciones que pudieran obedecer a tratos indignos o degradantes. De lo expresado una aclaración, la Corte no considera tortura los castigos con fuste, si este causa un daño corporal mínimo.

Aunque en teoría “en una y otra circunstancia la condición étnica no se pierde ante la ley, y menos el operador judicial tiene facultades para desconocer o sustituir las cualidades que subyacen en el individuo por su condición étnica” (Quintero Calvache, 2011, p. 80), en la práctica sucede lo contrario, por ejemplo, cuando un indígena es sancionado penalmente por la Jurisdicción Ordinaria y en consecuencia debe permanecer en la cárcel por varios años en donde no se le brindan espacios, condiciones y oportunidades para ejercer sus usos y costumbres o practicar su lengua materna.

Esta coordinación, así mismo, permitiría un diálogo de doble vía que permita aprendizajes mutuos sobre qué son los derechos humanos, cuáles son, cómo se respetan, cuáles son los límites de la actuación para una u otra jurisdicción y cuál es la importancia de respetarlos. Sin que dicho consenso sobre los derechos humanos

implique la intromisión de una en los sistemas de la otra jurisdicción o la transformación de la esencia de la Jurisdicción Indígena.

### Funciones

La coordinación entre las dos jurisdicciones permitiría que las autoridades indígenas y los jueces se obliguen a ejercer sus funciones de forma más eficiente y a satisfacer demandas particulares de aplicación de justicia (Sánchez & Jaramillo, 2007, p. 46). Para ello se hace urgente que los funcionarios judiciales conozcan el funcionamiento de los sistemas propios de justicia, la normatividad nacional e internacional, para que apliquen las obligaciones, y de esta forma otorguen garantías procesales a los indígenas enjuiciados por la Jurisdicción Ordinaria, eviten abusos de poder o la pérdida de la cultura en el procesado indígena que haya cometido delitos por fuera del territorio y contra no indígenas (García, 2006, p. 158), pues como se ha visto los derechos del procesado indígena responden a un mandato concreto y expreso en la Constitución, los tratados y convenios internacionales.

Los operadores judiciales no tienen excusas ante la comunidad internacional por el desconocimiento que tienen de los mandatos del Convenio 169 de la OIT, “que define el trato para miembros de las comunidades indígenas y tribales en los procedimientos judiciales que se siguen contra ellos. En la mayoría de los casos, cuando dentro de las zonas de resguardo el indígena comete acciones punibles contra miembros de la propia comunidad, y sus acciones son enjuiciadas por el sistema judicial ordinario, se le desconocen principios básicos para un tratamiento justo, como los principios de juez natural y tribunal preexistente. El mandato del Convenio 169 dispone en todo momento una serie de privilegios a los indígenas que comentan faltas de carácter penal, bien sea bajo las especiales condiciones territoriales o fuera de los territorios” (Quintero Calvache, 2011, p. 76).

“El desconocimiento de las disposiciones internacionales que reconocen la existencia integral de los pueblos indígenas y las garantías judiciales para sus miembros dentro del sistema judicial se produce, por una parte, por el capricho incontrolado de los jueces que en ejercicio de su posición dominante desconocen tales garantías. Por otra parte, es la falta de competencia para la integración sistemática de esas disposiciones internacionales en el ámbito de la administración judicial, la que pone esas garantías por fuera del sistema de derechos de los miembros de comunidades étnicas y tribales” (Quintero Calvache, 2011, p. 77).

### Conflictos

La coordinación entre las dos jurisdicciones podría evitar conflictos u originar su superación y/o reducción.

De acuerdo a Burgos (2008) “las instituciones deben diseñar mecanismos de articulación que permitan a los pueblos ejercer su jurisdicción, teniendo como límite la Constitución, toda vez que es frecuente encontrar conflictos en el momento de ejercer una u otra jurisdicción, quizá porque esta figura en Colombia es de un reconocimiento e implementación constitucional reciente”.

Los conflictos se han venido presentando porque una jurisdicción asume casos que no le corresponde, extralimita su competencia, usurpan la administración de justicia o porque no garantiza principios y derechos, como la cultura. Obsérvese cuatro ejemplos de delitos, algunos han sido abordados por la Corte Constitucional que en sus sentencias se ha encargado de aclarar y delimitar funciones.

El sonado caso del líder indígena del Cauca Feliciano Valencia es ejemplo de los conflictos que se hubiesen evitado si la Jurisdicción Ordinaria estuviese coordinada con la Especial y respetara sus límites, y viceversa.

El Tribunal Superior de Popayán falló en contra de Valencia, según Rosembert Ariza Santamaría (2015), desconociendo la capacidad política y legal de los indígenas de ejercer control y jurisdicción. Desde la orilla indígena a Feliciano no debía sancionársele pues en el momento de los hechos en que a un sub – oficial del Ejército se le dieron latigazos éste líder ejercía el derecho colectivo y fundamental de administrar justicia y/o de hallársele culpable competía a la Jurisdicción Indígena juzgarlo, no a la ordinaria como terminó ocurriendo.

Ahora bien, cuando se pensaba que desde la mirada del derecho occidental a Valencia debía juzgársele por lesiones personales, “pese a que él tampoco le propinó los latigazos al sub-oficial del ejército”, finalmente terminó siendo juzgado por secuestro. Posterior a ello, “en el caso Miguel Ángel Beltrán todo el país conoce que las pruebas con que fue absuelto, y después condenado el profesor, fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia, no obstante el Procurador General y el juez de segunda instancia hicieron caso omiso de la valoración probatoria del máximo Tribunal”. Ante ello Ariza manifiesta que es válido realizar los siguientes cuestionamientos ¿se está frente a un Procurador y unos jueces penales imparciales y celosos del positivismo legal monista? ¿fallan



en Derecho nuestros jueces penales y nuestro Procurador? y ¿qué intereses valoró este Tribunal como superiores para condenarlo por secuestro, y no haber permitido que la Jurisdicción Indígena actuara?

Lo anterior y lo abordado en el presente estudio deja en evidencia cuatro realidades:

Primero, los conflictos recurrentes entre las dos jurisdicciones justifican la urgencia de la Ley de Coordinación, aunque por sí sola no garantice su materialización y eficiencia.

Segundo, como mínimo la Ley de Coordinación deberá partir de la identificación de puntos de encuentros, la observancia de los límites de una y otra y la redefinición de cuándo, en qué casos interviene una en la otra y con qué procedimientos o protocolos.

Tercero, “el mandato de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, permite superar las dificultades que se le presentan a la judicatura cuando se trata de enjuiciar a miembros de comunidades indígenas por crímenes cometidos dentro de sus territorios y cuando incurran en faltas por fuera de él” (Quintero Calvache, 2011, p. 79).

Y cuarto, aunque no se ha definido claramente el mecanismo de coordinación con el sistema nacional, en algunos casos las comunidades, amparadas en sus propias razones, integran su jurisdicción con el sistema nacional, como es el caso de las penitenciarías para evitar mayores conflictos al interior del pueblo (posibles derramamientos de sangre) o acciones que consideran deben ser de conocimiento de la jurisdicción nacional, como el narcotráfico, por ejemplo, también, en algunos casos el castigo o remedio aplicado por contravenir los derechos constitucionales, como en el caso de la aplicación de la pena de muerte, se ha promovido con las comunidades indígenas mantener sus costumbres pero modificando el castigo.

### **Fortalecimiento de los sistemas jurídicos propios**

La coordinación de las dos jurisdicciones podría originar que las comunidades indígenas se empoderen de la administración y aplicación eficiente de justicia; mediante la participación, la concertación comunitaria, las modificaciones de prácticas sancionatorias, las ampliaciones de castigos, el respeto de derechos



humanos, la escritura de sus reglamentos internos, y la formación profesional de sus jóvenes para que articulen con las instituciones del orden nacional.

El fortalecimiento de los sistemas propios es deseable no sólo para perfeccionar la coordinación entre jurisdicciones sino, además, para que la administración de justicia indígena sea valorada, aceptada, legitimada y protegida por los occidentales y los mismos indígenas. En la actualidad el debilitamiento de la justicia propia es evidente; incluso es creciente la voz de los indígenas que creen que incentiva la impunidad, algunas comunidades e individuos acuden con frecuencia a Jurisdicción Ordinaria para resolver sus asuntos o se aplique justicia y/o algunos pueblos han variado sus costumbres haciéndolas más parecidas a las de la sociedad mayoritaria.

Ahora bien de darse en algún momento esta coordinación, aunque ya se está dando en la marcha experiencias de articulación, ¿implicaría que la Jurisdicción Especial Indígena se occidentalice? No necesariamente la coordinación entre las dos jurisdicciones implicaría la occidentalización de la Jurisdicción Indígena, que se dé o no dependerá de la confluencia de factores específicos, entre estos:

- El arraigo cultural y valoración de la justicia propia.
- Grado de fortalecimiento de las propias jurisdicciones y empoderamiento comunitario para la cooperación y su exigibilidad.
- Las comunidades indígenas, las universidades y los jueces ordinarios desarrollen o no procesos de aprendizajes mutuos y de construcción de propuestas.
- Difusión y desarrollo de estudios jurídicos que permitan construir conocimiento sobre una y otra jurisdicción.
- Nivel de conocimiento o desconocimiento mutuo de la normatividad, procedimientos, instancias, sistemas jurídicos propios, particularidades de los pueblos, entre otros.
- Apatía o involucramiento de las universidades para hacer de los profesionales en derecho actores sensibles y eficientes frente a asuntos relativos a la administración de justicia occidental a indígenas.
- El establecimiento o no de reglas generales para dirimir conflictos.

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



- Corrupción o asignación y ejecución presupuestal eficiente.
- Justicia o control de la impunidad (legitimidad y satisfacción de las víctimas de delitos y de las comunidades de las sanciones impuestas).
- Sistema carcelario occidental que respete o no el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

De esta manera se finaliza el proyecto de investigación *Jurisdicción Especial Indígena en Colombia: un estudio comparado con la Jurisdicción Ordinaria*, quedando abiertas al menos dos preguntas para próximas investigaciones: ¿cuáles pueblos indígenas tienen sistemas jurídicos occidentalizados y cuáles han sido sus transformaciones históricas? y ¿qué factores están impidiendo que la coordinación entre las dos jurisdicciones se dé?, una respuesta preliminar a esta última pregunta podría ser, los fundamentos que dan soporte a la organización del Estado Social de Derecho, el pluralismo y el monismo.

*“Colombia siendo un Estado Social de Derecho tiene enfrente, por un lado, proporcionar garantías al sistema judicial que impida las intervenciones de otros poderes públicos sobre éste y, por otro, ser garante de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución”  
(Diana Cruz Micán).*

## REFERENCIAS

- Álvarez, F. (12, febrero, 1999). *Salvados en Colombia bebés indígenas gemelos condenados a muerte*. En Entrevista hecha al Personero Municipal de Saravena por Caracol Radio. Recuperado [http://caracol.com.co/radio/1999/02/19/nacional/0919407600\\_020268.html](http://caracol.com.co/radio/1999/02/19/nacional/0919407600_020268.html)
- Arango Ochoa, R. & Sánchez Gutiérrez, E. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. Bogotá D.C.: DNP.
- Arbeláez, Lucía (2004) *La jurisdicción especial indígena en Colombia y los mecanismos de coordinación con el sistema judicial nacional*. Consejo Superior de la judicatura de Colombia y Fundación Myrna Mack de

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



Guatemala. Justicia de paz y derecho indígena: análisis y propuestas de coordinación. En:

<http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/21LucaArbelaez.pdf>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948, Diciembre, 10). *Resolución 217 A (III) por la cual se adopta y proclama la declaración Universal de los derechos humanos*. Recuperado de [www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/](http://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/)

Asamblea General de las Naciones Unidas.(1966, Diciembre, 16 ). *Resolución 2200 A (XXI) por la cual se adopta y ratifica el Acto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos*. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Recuperado de <http://www.migracion.gob.bo/web/upload/ddhh6.pdf>

Asamblea General de las Naciones Unidas en (1979, Diciembre, 18). *Resolución 34/180 por la cual se adopta y se ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, (CEDAW). Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1) Serie Tratados de Naciones Unidas N° 20378, Vol. 1246. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0031>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1984, Diciembre, 10). *Resolución 39\*46 por la cual se adopta y ratifica la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1). Recuperado de [www.hchr.org.co/publicaciones/libros/convencion\\_tortura.pdf](http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/convencion_tortura.pdf)

Asamblea General de las Naciones Unidas (1989, Noviembre, 20). *Resolución 44/25 por la cual se adopta y ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño*. Entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. Recuperado de [www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf](http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf)

Burgos Guzmán, F. E. (2008). *Entre la justicia indígena y la ordinaria: dilema aún por resolver*. Revista Derecho del Estado, 21, 95-108.

Castro Jorge, (2010). Los derechos humanos y la jurisdicción especial indígena. Revista Criterio Jurídico Garantista, 3, 114-121.

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



- Clavero Bartolomé, (2000). *Ama yunku, Abya Yala: constituyencia indígena y código ladino por América*, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales.
- Comité Internacional de la Cruz Roja, (1949, agosto, 12). *Convenios de Ginebra para proteger las víctimas de la guerra. Ginebra, Suiza: CICR*. Recuperado de <https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/tratados-de-dih.../convenios-de-ginebra>
- Consejo Superior de la Judicatura y Organización Nacional Indígena del Colombia ONIC (2003). *Programa: Apoyo a la Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena*. Bogotá D.C. Los Autores.
- Consejo Superior De La Judicatura-CSJ & Organización Nacional Indígena De Colombia-ONIC. (2006). *Compilación y selección de los fallos y decisiones de la jurisdicción especial indígena 1980-2006*. (1ª ed.). Bogotá: Legis.
- Constitución Política de Colombia. (1991). *Revisada y actualizada*. Bogotá: Leyer.
- Correa Vidal, E. & Muelas Mosquera, J.R. (1993). *Leyes indígenas*.
- Couture, E.J. (2010). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires.
- Departamento Nacional de Planeación –DNP. (2006). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. Bogotá D.C.C: DNP.
- Devis Echandía, H. (2009). *Nociones generales de derecho procesal civil*, (2ª ed.). Bogotá D.C.: Temis.
- Deconceptos.COM. (2015). *Jurisdicción*. Recuperado de <http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jurisdiccion>
- García María Alejandra. (2006). *Los derechos en nuestra propia voz pueblos indígenas y DESC: una lectura intercultural*. Colección de textos de aquí y ahora. ILSA. Bogotá.

- Henao, J. & Pineda, C. (2010). *Proyecto Embera Wera. Una experiencia de cambio cultural para la eliminación de la ablación genital femenina y la promoción de los derechos de mujeres Embera de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico del Departamento de Risaralda*. Bogotá D.C., Naciones Unidas.
- Holguín Sarria, A. (1997). *Los indígenas en la constitución colombiana*. Bogotá: Fundación para la investigación y la cultura FICA.
- Quintero Calvache, Juan Carlos (2011) *El fuero judicial de los pueblos indígenas frente a la justicia ordinaria y la responsabilidad del Estado colombiano por su vulneración fáctica*. En: <http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/356/1210>
- Marrugo Nuñez, N (2014). *Multiculturalismo, derechos humanos y derechos de los indígenas en Colombia. Práctica de la ablación en las niñas de la tribu Embera Chamí*, *Justicia Juris*, 10 (1), 32-42.
- Mattiolo, L. (1930). *Tratado de derecho judicial civil* (1ª ed.). Madrid: Reus.
- Oficina Internacional del Trabajo - OIT (2013). *Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Manual para los mandantes tripartitos de la OIT*. Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2013  
En: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---normes/documents/publication/wcms\\_205230.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf)
- Perafán Simmonds, C.C. (1995). *Sistemas Jurídicos Paez, Kogi, Wayúu y Tule*. Bogotá, Colcultura.
- Pineda Camacho, R. (2002). *Estado y pueblos indígenas en el siglo XX. La Política Indigenista entre 1886 y 1991*. Bogotá: Minerva
- Rocco, U. (2002): *Derecho Procesal Civil*. Ciudad de México: Editorial Jurídica Universitaria,
- Roldan Ortega, Roque. (2000). *Pueblos indígenas y leyes en Colombia, aproximación crítica al estudio de su pasado y su presente*. Santa fe de Bogotá D.C.: Tercer Mundo Editores.

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



Rosembert Ariza Santamaría (2015) *La Jurisdicción Especial Indígena en el caso Feliciano Valencia*. En: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/27465-la-jurisdiccion-especial-indigena-en-el-caso-feliciano-valencia.html>

Sánchez Botero, E. & Jaramillo Sierra, I. C., (2007). *La Jurisdicción especial indígena en Colombia*. (2ª ed.). Bogotá, Instituto de estudio del Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y Diario Oficial (sin fecha) *Decreto 1088 de 1993*. En: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1501>

UNICEF (2005). *Changing a harmful social convention: female genital Mutilation/cutting. Innocenti Digest*. Florencia, Italia: UNICEF

Universidad ICESI (sin fecha) *Ficha de la sentencia C-139 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz*. En: [https://www.icesi.edu.co/grupo\\_acciones\\_publicas\\_icesi/images/stories/proyectos/comunidades\\_negras/fichas/ficha%20sentencia%20c-139-96.pdf](https://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/images/stories/proyectos/comunidades_negras/fichas/ficha%20sentencia%20c-139-96.pdf)

### NORMATIVIDAD

Presidencia de la República de Colombia. *Decreto 1088 (10, junio, 1993). Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas*. Santa Fe de Bogotá: *Diario Oficial*. 1 de junio de 1993.

Congreso de la República de Colombia. *Ley 89 (25 de Noviembre 1890) por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada*. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. *Ley 21 (4 de Marzo 1991) por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. Bogotá: *Diario Oficial* 39.720 marzo 6 de 1991.

Congreso de la República de Colombia. *Ley 270 de 1996 (marzo, 7). Estatutaria de la Administración de Justicia*. Bogotá D.C.: *Diario Oficial* 42.745 marzo 15 de 1996.

Congreso de la República de Colombia. *Ley 599 de 2000 (julio. 24) por el cual se expide el Código Penal.* Bogotá D.C.: *Diario Oficial* 44.097 julio 24 de 2000.

## **JURISPRUDENCIA**

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda-subsección “A” (04 de octubre de 2007), Radicación numero: 25000-23-25-000-2004-06633-01(1373-07).Consejero ponente: Jaime Moreno García.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección “A. Radicación numero: 25000-23-25-000-2004-06633-01(1373-07) del 4 de octubre de 2007.

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativa, sección tercera (26 junio 2014). Sentencia radicada 41001-23-31-000-1994-07810-01 27283. C.P. Danilo Rojas Betancourt.

Corte Constitucional de Colombia (30 mayo 1994). Sentencia No. T-254/94. Comunidad Indígena-Naturaleza/Indefensión frente a comunidades indígenas. Ref: Expediente T-30116, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional de Colombia. (8 agosto 1996). Sentencia T-349/96. Derecho a la supervivencia cultural principio de diversidad étnica y cultural-Alcance. Referencia: Expediente T-83456. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

Corte Constitucional de Colombia (26 septiembre 1996). Sentencia T-496/96. Fuero Indígena-Alcance/Fuero Indígena-Límites. Referencia.: Expediente T-100537.Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

Corte Constitucional de Colombia. (15 octubre 1997). Sentencia No. T-523/97. Principio de diversidad étnica y cultural-Reconocimiento constitucional. Referencia.: Expediente T-124907. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

Corte Constitucional de Colombia (18 septiembre 1998). Sentencia SU-510/98. Resguardo Indígena Ika O Arhuaco. Referencia: Expediente T-141047. Aprobada por acta N° 38. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.



Corte Constitucional de Colombia (25 enero 2000). Sentencia T-030/00. Menores U'WA-Medidas de protección. Referencia: expediente T-244330. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.

Castro Jorge (2010) *Los derechos humanos y la Jurisdicción Especial Indígena Criterio jurídico garantista*. Issn: 2145-3381 - Año 2 - No. 3 - Julio-Diciembre de 2010. En:  
[http://www.fuac.edu.co/recursos\\_web/documentos/derecho/revista\\_criterio/articulosgarantista3/6jorgecastro.pdf](http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista3/6jorgecastro.pdf)